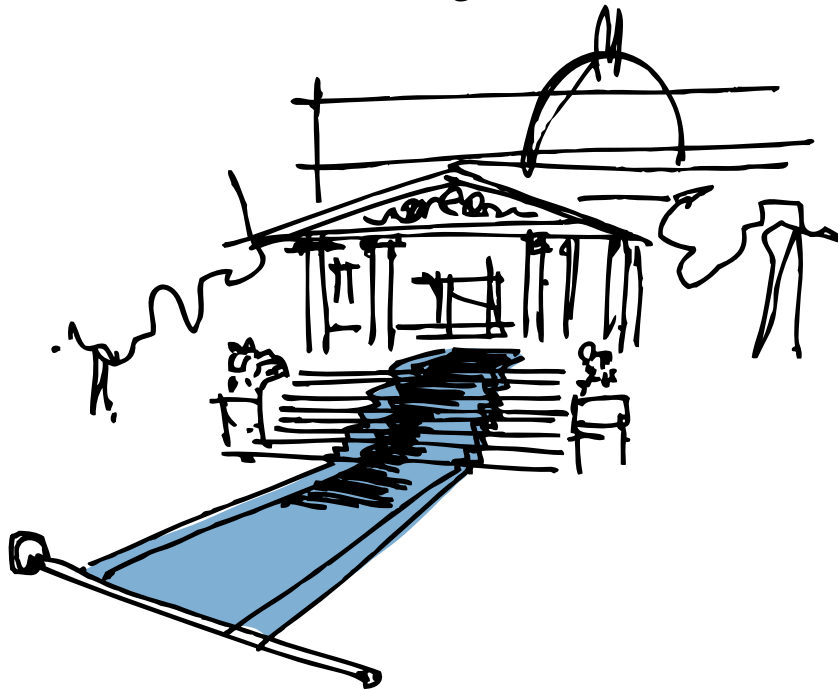


Elecciones en España: *entre la crispación y la posibilidad de un nuevo consenso*

Fernando Rodríguez Doval



El próximo domingo 9 de marzo se llevarán a cabo elecciones generales en España para renovar las Cortes Españolas, integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Al ser el régimen español una monarquía constitucional y parlamentaria, es de esperarse que el rey Juan Carlos I encargue la formación del nuevo gobierno al líder del partido que obtenga mayor número de diputados; para poder ser elegido como presidente de gobierno es necesario que el candidato vencedor obtenga el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados en la sesión de investidura.¹

¹ Hay 350 diputados, por lo que la mayoría absoluta se logra con el apoyo de 176.

En la actualidad gobierna en España el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la oposición está encabezada por Mariano Rajoy, líder del Partido Popular. Al momento de escribir estas líneas, las encuestas auguran una contienda muy cerrada, pudiendo presentarse incluso el caso de que un partido obtenga más votos y otro más escaños, debido a las peculiaridades del sistema electoral español, regido por la fórmula D'Hont.²

² Esta regla electoral consiste en dividir todos los votos de una circunscripción sucesivamente entre 1, 2, 3, 4, 5... y asignar los escaños en orden decreciente. Por lo tanto, subrepresenta a los partidos medianos y pequeños con presencia nacional, y sobrerrepresenta a los partidos nacionalistas que son dominantes en algunas pocas circunscripciones. En España, cada una de las 52 provincias se constituye en circunscripción,

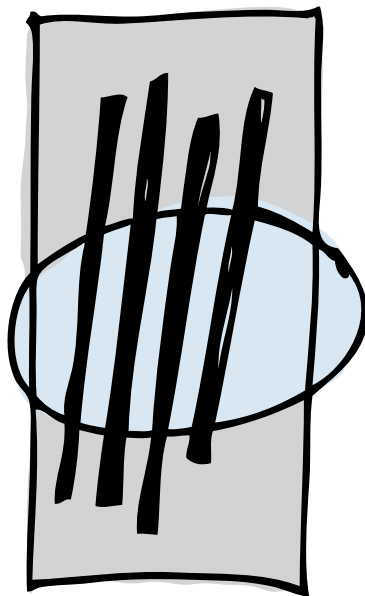
Para entender la actual situación política española es necesario remontarse cuatro años atrás, cuando Rodríguez Zapatero venció por un margen relativamente considerable a Mariano Rajoy, quien era el gran favorito hasta antes de los atentados terroristas en la estación de trenes de Atocha, en Madrid, ocurridos el 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones. El mal manejo de la información por parte del gobierno de José María Aznar –quien insistía que había sido ETA y no el terrorismo islámico

habiendo provincias como Madrid o Barcelona que asignan un gran número de diputados (alrededor de 40 cada una), mientras que otras como Ceuta o Melilla sólo disponen de dos.

mico el responsable—, aunado a una feroz campaña socialista y de ciertos medios de comunicación proclives a la izquierda que violentó incluso el sábado de reflexión previo a la jornada electoral, ocasionaron un espectacular vuelco en las preferencias de una ciudadanía que salió a votar en forma masiva, dando el triunfo a los socialistas encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero.

Comenzó entonces una legislatura marcada por la crispación, el ríspido enfrentamiento entre los dos principales partidos (Socialista y Popular) y la ruptura de consensos fundamentales que databan desde 1978, fecha en que se publicó la Constitución con la que iniciaba un nuevo período político en España, después de casi 40 años de gobierno del general Francisco Franco.

El gobierno de Rodríguez Zapatero ha impulsado leyes y políticas públicas harto polarizantes y divisivas. Una de ellas fue la promoción de un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña, a fin de ganarse el apoyo parlamentario de los grupos más radicales —y minoritarios— del independentismo catalán. Este nuevo Estatuto, cuya constitucionalidad todavía no ha sido declarada por el Tribunal Constitucional, supone una ruptura con el modelo territorial de España pactado desde la transición a la democracia, exalta un nacionalismo catalán exacerbado y excluyente, e impone un modelo lingüístico



discriminatorio para los que únicamente hablan el idioma español en tierras catalanas.

Por otro lado, Rodríguez Zapatero tomó la decisión de negociar con la banda terrorista ETA, lo cual ocasionó una gran polémica social y que las asociaciones de víctimas del terrorismo salieran masivamente a las calles a protestar; además, rompió el consenso antiterrorista que hasta entonces habían mantenido los dos principales partidos españoles.

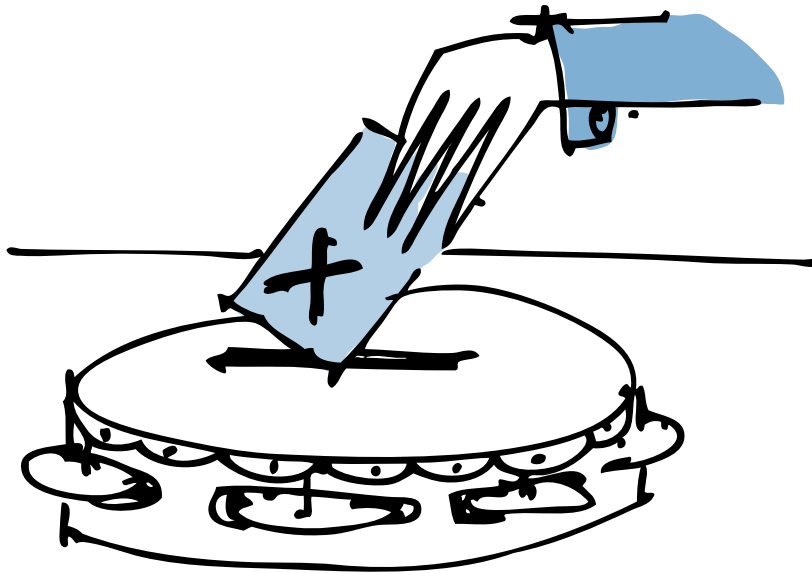
En el terreno social, el gobierno socialista impulsó una ley para reconocer los matrimonios entre parejas del mismo sexo,

lo cual lo enfrentó a numerosos colectivos defensores de la familia y a la Iglesia Católica. Esta ley también fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Otra ley que generó enorme polarización fue la relativa a la memoria histórica, en donde por decreto se estableció una visión determinada, no exenta de cierto maniqueísmo, de la guerra civil española, un conflicto que dividió a familias enteras y que los españoles habían preferido superar en aras de una auténtica reconciliación, dejándole a los historiadores la interpretación de tan dolorosos sucesos.

Otra medida polémica fue la implementación de la materia “Educación para la Ciudadanía”, cuyos opositores consideran una forma de adoctrinar a los niños españoles en las máximas del socialismo.

Como nunca antes, los cuatro años socialistas han visto salir a las calles a millones de españoles descontentos con las políticas de Zapatero, a las cuales consideran marcadas por el radicalismo. Lo mismo defensores de la familia que asociaciones de víctimas del terrorismo, pasando por sindicatos de guardias civiles, grupos católicos o gente preocupada por la unidad de España, las manifestaciones multitudinarias contra el gobierno han sido una constante en este periodo.

Todo lo anterior ha propiciado que el Partido Popular tenga posibilidades de ganar las elecciones, a pesar de su errático



desempeño como oposición y sus divisiones internas, así como el cuestionamiento cada vez mayor hacia el liderazgo de Mariano Rajoy.

La actual campaña electoral en España ha girado en torno al eje económico. Los populares acusan a los socialistas de gobernar sin un modelo económico claro y serio, por lo que proponen un conjunto de medidas que reactiven la alicaída economía española y fomenten la creación de empleos. Mariano Rajoy incluyó en su programa un proyecto de reforma fiscal que bajaría los impuestos a las pequeñas y medianas empresas y exentaría de las contribuciones a todos aquellos que ganen menos de 16,000 euros al año. Los socialistas, por su parte, han prometido devolver 400 euros en la declaración fiscal de todos los asalariados, a fin de poder

aumentar su capacidad de consumo y así lograr un mayor crecimiento económico. Rodríguez Zapatero ha dividido su plataforma electoral en tres grandes apartados: bienestar social y empleo, innovación y progreso sostenible, y libertad, convivencia y derechos ciudadanos.

Por otro lado, los populares prometen recuperar los consensos en los asuntos fundamentales, mientras que los socialistas acusan a los populares de ser justamente quienes han propiciado la crispación.

Algo que destacar en estas elecciones es la presencia, por primera vez, de partidos de reciente creación que apelan a causas que consideran han sido abandonadas por los dos principales partidos. Entre ellos están Unión Progreso y Democracia (UPyD), encabezado por la ex

socialista Rosa Díez y por el filósofo Fernando Savater, y que asegura que los dos grandes partidos nacionales han cedido permanentemente ante el chantaje de los nacionalismos periféricos; Partido de los Ciudadanos (C's) que igualmente postula un mensaje antinacionalista de izquierdas; y Alternativa Española (AES), partido socialcristiano que busca defender las raíces cristianas de España, así como la vida y la familia.

Es muy probable que el partido vencedor de las elecciones del próximo 9 de marzo no consiga por sí solo la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Es aquí donde entran en juego una amplia gama de posibles coaliciones para lograr la investidura, por lo que los minoritarios partidos nacionalistas volverían a jugar un rol fundamental. Ante esta situación, no pocos analistas consideran que ha dejado de ser descabellado pensar en una gran coalición entre populares y socialistas, similar a la que actualmente encabeza Angela Merkel en Alemania, a fin de limitar la capacidad de chantaje de los partidos minoritarios. Esta opción, que todavía parece lejana, podría suponer un nuevo consenso político en España que dejara de lado el clima de confrontación que actualmente se vive y recuperara los acuerdos en temas tan fundamentales como el modelo territorial del Estado, la lucha antiterrorista, o las relaciones internacionales. 